



RESEÑA LEGISLATIVA

ISSN 0717-0416

Nº 1348

7 de Septiembre de 2018

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

BOLETÍN 11952-12

RESEÑA LEGISLATIVA es una publicación de
LIBERTAD Y DESARROLLO
DIRECTOR RESPONSABLE: Luis Larraín A.
EDITOR: Pablo Kangiser G.
DIRECCIÓN: Alcántara 498, Las Condes, Santiago,
Chile.



RESEÑA LEGISLATIVA

Nº 1348

7 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ÍNDICE

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

BOLETÍN 11952-12

OPINIÓN EJECUTIVA	4
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY	5
COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL	9
COMENTARIOS DE MÉRITO ESPECÍFICOS.....	15
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY.....	17
DISPOSICIONES TRANSITORIAS	40
ANEXO I.....	41
ANEXO II.....	43

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11952-12

REFERENCIA	Moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
INICIATIVA	Mensaje presidencial
ORIGEN	Cámara de Diputados
MINISTERIOS	Del Interior y Seguridad Pública, De Hacienda, De Economía, Fomento y Turismo, De Medio Ambiente y Secretaría General de la Presidencia
INGRESO	31 de julio de 2018
ARTICULADO	Cuatro artículos permanentes y cuatro transitorios; los artículos permanentes modifican, respectivamente, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y Superintendencia del Medio Ambiente, los Tribunales Ambientales y planta de personal del Ministerio del Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental

OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es de vital importancia para el desarrollo sustentable del país. Cada proyecto aprobado representa una opción de crecimiento, progreso y creación de empleos, resguardando al medioambiente.

La reforma al SEIA presentada por el Gobierno propone básicamente: la creación de macrozonas y la eliminación del Comité de Ministros, con el objeto de reducir el componente político en el SEIA; participación ciudadana anticipada; y ampliación del recurso de reclamación ante tribunales ambientales, el que sería directo, sin pasar por otras instancias de reclamación. Asimismo, introduce mejoras al procedimiento, tales como el carácter vinculante de una consulta de pertinencia sobre la procedencia o no de someter un proyecto al SEIA, la divisibilidad de una Resolución de Calificación Ambiental, la obligación de tramitar electrónicamente el procedimiento, entre otras.

Las modificaciones propuestas son un primer paso positivo, pero aún insuficiente. Es de esperar que el Congreso aproveche la oportunidad para agregar otros aspectos que contribuyan a mejorar la gestión en el proceso de evaluación y fiscalización del impacto ambiental de los proyectos ■■■

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley objeto de análisis introduce diversas reformas con el objeto de modernizar, fortalecer y perfeccionar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

En particular, se proponen las siguientes modificaciones:

1. REDUCCIÓN DEL COMPONENTE POLÍTICO EN EL SEIA.

- Se propone el establecimiento de tres direcciones macrozonales (Norte, Centro y Sur), coincidentes con la competencia territorial de los Tribunales Ambientales, con asientos en Antofagasta, Santiago y Valdivia. En caso que el proyecto genere impactos ambientales en distintas macrozonas, el proyecto será evaluado por la macrozona en que se desarrollen las obras materiales, solicitando informe a los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental en las regiones que correspondieren; y, si las obras materiales se encuentran emplazadas en dos o más macrozonas, corresponderá al Director Ejecutivo del SEA determinar la macrozona que le corresponderá evaluar ambientalmente.
- Bajo las direcciones macrozonales se mantendrían las Oficinas Regionales del Sistema de Evaluación Ambiental y se crearían los Comités Técnicos Regionales, cada uno presidido por el Jefe de Oficina Regional. Estos comités estarían encargados de analizar técnicamente los pronunciamientos sectoriales y resolver los desacuerdos técnicos durante el proceso bajo un concepto de ventanilla única. El Comité Técnico estará integrado por el Jefe de la Oficina Regional del SEA, quien lo presidirá, los directores regionales de los servicios públicos que tengan competencia en las materias de medio ambiente, incluido el Gobernador Marítimo respectivo y el Consejo de Monumentos Nacionales. Asimismo, lo deberán integrar los SEREMI correspondientes conforme a la tipología del proyecto, de la o las regiones donde éste se ejecutará.
- Junto con ello, se propone la creación de tres Comisiones de Evaluación Macrozonal, a cargo de la evaluación de los proyectos. Con ello se eliminan el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Regionales. Cada Comisión de Evaluación Macrozonal sería presidida por el Director Macrozonal, quien sería nombrado por el Director Ejecutivo del SEA a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Los otros miembros serían el Intendente (en el futuro, el Gobernador Regional electo); los Secretarios Regionales Ministeriales SEREMI de Medio

Ambiente y Economía; dos profesionales expertos, uno en ciencias relativas al medioambiente y el otro en derecho (ambos nombrados por el Director Ejecutivo del SEA a través del sistema de ADP); y un miembro designado por el Presidente de la República.

- Se elimina la instancia recursiva administrativa, esto es, la instancia de reclamación ante el Comité de Ministros o el Director Ejecutivo del SEA, según sea el caso, contemplándose un recurso judicial directo ante los Tribunales Ambientales (TA), para que sean estos órganos los llamados a resolver las controversias que se susciten.
- Con todo, se establece un recurso de aclaración especial, para efectos que los proponentes de los proyectos, y la ciudadanía que participó en el procedimiento, puedan acudir ante el mismo órgano que dictó el acto, a fin de aclarar pasajes oscuros del acto administrativo.

2. AMPLIACIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- Los proyectos o actividades en que la intención del proponente sea evaluarlos a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), deberán someterse a una etapa de participación ciudadana en forma previa su ingreso al SEIA, lo cual deberá ser informado al SEA, y tendrá por objeto proponer un proceso de diálogo temprano entre la comunidad y el proponente, con la finalidad de generar un acta y eventuales acuerdos que se plasmen en un documento denominado “Términos de Referencias Ambientales”.
- Los proyectos o actividades en que la intención del proponente sea evaluarlos a través de un Declaración de Impacto Ambiental (DIA), podrán someterse, de manera voluntaria, a la etapa de participación ciudadana temprana, la que seguirá el mismo procedimiento que para los EIA.
- Una vez expresada por el proponente la decisión de sometimiento a la etapa de Participación Ciudadana Anticipada (PAC), la realización será obligatoria. El proponente deberá publicar en el Diario Oficial y en un diario o periódico de la capital de la región o de circulación nacional, según sea el caso, una convocatoria para participar en la primera reunión.
- Una guía establecerá la metodología para la PAC, y una vez protocolizados los Términos de Referencia Ambientales, deberán ser elevados a consulta al TA competente para su autorización. Con dicha autorización, el documento protocolizado y copia autorizada de la

resolución del TA, deberán ser presentados al SEA, para su registro y conocimiento, del cual se publicará un extracto en el Diario Oficial.

- Se amplían también los espacios de participación ciudadana dentro de la SEIA, para las DIA (a solicitud de 20 personas o 4 organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica).

3. SE CREAN NUEVOS RECURSOS QUE PERMITEN SOMETER A CONOCIMIENTO DE LOS TA LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE NATURALEZA AMBIENTAL:

- Se crea un recurso de reclamación directo ante los TA, para cualquier persona que se sienta directamente afectada en un interés legítimo ambiental, de carácter específico, producto de la dictación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
- Se permite recurrir de reclamación ante cualquier acto administrativo de carácter ambiental en donde la ley que regule dicho instrumento establezca un reclamo de ilegalidad.

4. OTRAS MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO:

- Se introducen modificaciones en relación a los proyectos que deben someterse a evaluación de impacto ambiental.
- Los proponentes de los proyectos o actividades, en sus EIA o DIA, deberán describir la forma en que tales proyectos o actividades se desarrollan con los planes de desarrollo comunal. Asimismo, deberán hacerlo respecto de la compatibilidad de sus proyectos o actividades con los planes regionales de ordenamiento territorial (PROT).
- Los proponentes o titulares de los proyectos podrán formular consulta previa respecto a si un determinado proyecto o actividad debe someterse al SEIA. Lo mismo podrán hacer respecto a la modificación de un proyecto. La respuesta a esa consulta será vinculante.

- La tramitación de la evaluación de impacto ambiental de proyectos, así como todo procedimiento llevado a cabo por el SEA, se realizará a través de medios electrónicos.
- Se consagra que los órganos de la Administración del Estado no podrán, ya sea de oficio o a petición de parte, ejercer la potestad invalidatoria respecto de las RCA, así como cualquier otra resolución dictada dentro del SEIA.
- Las RCA serán divisibles, previa propuesta del titular a la Comisión de Evaluación Macrozonal respectiva, según quien haya dictado dicha resolución, en aquellos casos en que sea posible diferenciar los impactos ambientales en la propuesta de división, así como las medidas y condiciones asociadas y su seguimiento ambiental, para la eventual división de la RCA ■■■■

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

ANTECEDENTES GENERALES

En la actualidad, todo proyecto o actividad señalado en el artículo 10 de la Ley N°19.300¹, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LGBMA), susceptible de causar impacto en el medio ambiente debe ingresar al SEIA, ya sea mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

La dirección regional del SEA respectiva administra el proceso, salvo para proyectos inter-regionales, en los que la calificación ambiental la hace la Dirección Nacional del SEA, directamente. En él, participan diversos servicios sectoriales que pueden revisar y realizar observaciones. Esta instancia es de carácter técnico y culmina con el Informe Consolidado de la Evaluación Ambiental (ICE), en el cual el SEA regional recomienda aprobar o rechazar el EIA o DIA.

El informe ICE sirve de base para que la Comisión de Evaluación Regional entregue su aprobación o rechazo al proyecto, a través de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Esta comisión es presidida por el Intendente Regional e integrada por 10 Secretarios Regionales Ministeriales (SEREMI)² y el Director Regional del SEA, quien actúa como secretario. La Comisión de Evaluación Regional

puede calificar proyectos con independencia de lo recomendado por el SEA en el ICE.

Los proyectos pueden luego ser reclamados en instancias superiores mediante recursos administrativos de reclamación ante un Comité de Ministros³ en el caso de los EIA, o ante el Director Ejecutivo del SEA en el caso de las DIA. Luego de esa instancia, se pueden formular reclamaciones judiciales ante el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema.

PROBLEMAS DEL SEIA

En términos generales Chile tiene un buen diseño técnico del sistema de evaluación de impacto ambiental que se adhiere a las buenas prácticas de la literatura internacional⁴. Los problemas del SEIA son más bien de gestión, excesiva politización del proceso de evaluación y derivados de exigirle a este sistema soluciones a aspectos para los cuales no fue diseñado, lo que se traduce en incertezas y atrasos en la calificación de proyectos.

Las certezas jurídicas que el SEIA debiera entregar tanto a los inversionistas como a la ciudadanía se ven mermadas por el hecho que dentro del proceso mismo del SEIA, el criterio técnico del

1 Dicho artículo define diversas tipologías de proyectos que deben someterse al SEIA.

2 Los SEREMI sectoriales que integran la Comisión de Evaluación Regional son los representantes de los Ministros de Medio Ambiente, Agricultura, Desarrollo Social, Economía Fomento y Turismo, Energía, Minería, Obras Públicas, Salud, Transporte y Telecomunicaciones, y Vivienda y Urbanismo.

3 El Comité de Ministros está integrado por seis ministros: el de Medio Ambiente, quien lo preside, y los de Agricultura, Economía Fomento y Turismo, Energía, Minería, y Salud.

4 Joseph et al (2015). Good practices for environmental assessment. Impact Assessment and Project Appraisal, 33(4).

SEA puede ser debilitado por órganos de carácter político como son la Comisión de Evaluación y el Comité de Ministros. En efecto, se observa que un porcentaje creciente de proyectos están enfrentando reclamaciones, sobre todo en el caso de EIA. En el año 2017, un 57,1% de los casos fueron reclamados ante el Comité de Ministros (CPC 2017).⁵

Los plazos de evaluación son extensos debido en gran parte a las diversas instancias de evaluación y reclamación existentes, y por la falta de focalización en el alcance de la participación de múltiples servicios sectoriales. Las DIA tienen un plazo legal de evaluación equivalente a 4,2 meses.⁶ Sin embargo, el plazo promedio de aprobación para las DIA entre los años 2007 y 2016 fue de 8 meses. Asimismo, mientras el plazo legal para los EIA es de 8,4 meses, la aprobación promedio tomó casi 18 meses. Más aún, la tendencia ha sido creciente tanto para DIAs como EIAs.

Los problemas mencionados, sin duda, han contribuido a la disminución del número y montos de inversión de proyectos en el SEIA, especialmente notoria durante el último Gobierno de la Presidenta Bachelet. Durante ese período, el número promedio de proyectos aprobados disminuyó 65% y la inversión disminuyó 46% comparado con el período 2010-2014.

5 CPC (2017), Informe N° 5, Proyectos de inversión en el SEIA, Observatorio de la productividad.

6 Los plazos se miden en el equivalente de días corridos y no consideran el tiempo que tardan los recursos de reclamación antes de resolverse, ni el tiempo que les toma a los titulares de los proyectos el preparar los EIAs o las DIAs.

PROPUESTAS DEL PROYECTO

1. Reducción del componente político en el SEIA

Tal como se indicó con anterioridad, el proyecto de ley propone el establecimiento de tres macrozonas coincidentes con la cobertura territorial de los Tribunales Ambientales, con asientos en Antofagasta, Santiago y Valdivia. Se plantea crear tres direcciones macrozonales con el objetivo de lograr “una desconcentración territorial eficiente, eliminando factores de disparidad en los criterios (de evaluación entre regiones).”

Bajo las direcciones macrozonales se mantendrían las Oficinas Regionales del SEA, y se crearían los Comités Técnicos Regionales, cada uno presidido por el Jefe de Oficina Regional. Estos comités estarían encargados de analizar técnicamente los pronunciamientos sectoriales y resolver los desacuerdos técnicos durante el proceso bajo un concepto de ventanilla única. Un aspecto positivo de la propuesta es que a nivel macrozonal hay más posibilidades de acumular lecciones aprendidas en otras regiones, así como también contar con equipos más robusto de profesionales para revisar y evaluar los proyectos.

Junto con ello, se propone la creación de tres Comisiones de Evaluación Macrozonal, a cargo de la evaluación de los proyectos, eliminándose así el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Regionales. Cada Comisión de Evaluación Macrozonal sería presidida por el Director Macrozonal, quien sería nombrado por el Director Ejecutivo del SEA a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Los otros miembros serían el Intendente (en el futuro, el Gobernador Regional electo); los SEREMI de Medio Ambiente y Economía (cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República); dos profesionales expertos, uno en ciencias relativas

al medioambiente y el otro en derecho (ambos nombrados por el Director Ejecutivo del SEA a través del sistema de ADP); y un miembro designado por el Presidente de la República.

Es decir, cada Comisión de Evaluación Macrozonal estaría integrada por tres miembros que pueden ser nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República, tres que son nombrados por el Director Ejecutivo del SEA a partir de un filtro de mérito por medio del sistema de ADP y el gobernador regional electo por la ciudadanía.⁷ La ventaja de esta nueva composición de la Comisión es que tendería a una evaluación más técnica en relación a la situación actual, aunque sin dejar de lado el componente político, y mantendría cierta participación regional (a través del Gobernador Regional). No obstante ello, sería conveniente evaluar la conveniencia de generar una instancia con una mayor independencia de la autoridad de turno que entregue su evaluación técnica.

La propuesta también da mayor celeridad y certeza jurídica en la tramitación, porque se elimina la doble evaluación administrativa que existe actualmente a través de la reclamación al Comité de Ministros. Sin embargo, y dado que la gran mayoría de las reclamaciones concluyen en instancia administrativa, surge la preocupación por la eventual sobrecarga que podría generarse a los Tribunales Ambientales, si es que no se asignan los recursos y personal adecuado.

2. Participación temprana de las comunidades

La iniciativa busca que el titular del proyecto establezca un proceso de diálogo temprano con la comunidad y pueda hacer modificaciones a su proyecto antes del ingreso al SEIA. En el sistema actual los procesos formales de participación ciudadana se deben hacer cuando el proyecto ya ingresó al sistema y, por lo tanto, cuando la localización y otros parámetros críticos del proyecto ya están determinados.

La propuesta de incorporar formalmente instancias de participación ciudadana en las etapas iniciales de un proyecto es acertada, en la medida que ello contribuya a disminuir y racionalizar los conflictos que deben ser abordados durante la evaluación. Se debe tener presente que el proyecto de ley del Ejecutivo mantiene una segunda instancia de participación ciudadana dentro del proceso del SEIA. Queda la duda entonces de que ello no genere una nueva oportunidad para reintroducir o agravar las incertezas y demoras en el proceso. Si bien, en algunos casos, podría existir la necesidad de una segunda consulta, ésta debería ser específica y acotada y sólo en casos excepcionales en que hubiera un motivo fundado para ello.

El riesgo de una participación ciudadana demasiado anticipada o muy extendida (se propone un máximo de 18 meses) es que puede polemizar y hacer políticamente inviable un proyecto antes de que éste comience a diseñarse y que, por ende, pueda demostrar sus beneficios para la comunidad. Para ello será clave la correcta aplicación de los “términos de referencia ambiental” que se acuerden en las etapas tempranas de participación ciudadana. Sería conveniente considerar una implementación piloto de este enfoque de participación anticipada, comenzando con proyectos pequeños y luego,

⁷ En octubre del 2020 se elige por elección popular por primera vez a los gobernadores regionales, hasta entonces será el Intendente.

una vez refinada la metodología, aplicarla al resto del SEIA.

3. Ampliación del recurso de reclamación ante tribunales ambientales

Se eliminan las instancias recursivas administrativas de la LGBMA- con la salvedad del recurso de aclaración que se crea con este proyecto- y el ejercicio de la potestad invalidatoria del artículo 53⁸ de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, contemplándose el recurso de reclamación directo ante los tribunales ambientales como la vía recursiva idónea. De este modo, la decisión final recaerá en un tercero imparcial.

En particular, se crea un nuevo recurso de reclamación para “cualquier persona directamente afectada en un interés legítimo ambiental, de carácter específico”, el cual deberá interponerse dentro de un plazo de 30 días. Ello viene a resolver las diferencias ocurridas en relación al criterio jurisprudencial sobre la invalidación propia o impropia, otorgando mayor certeza a los titulares de proyectos y a la ciudadanía.

Al respecto, cabe señalar que actualmente la ley permite que sólo el titular del proyecto o los terceros que participaron de un procedimiento

de participación ciudadana cuyas observaciones no fueron debidamente consideradas, puedan reclamar en contra de la RCA, primero, en sede administrativa, y una vez agotada la vía administrativa, ante los tribunales ambientales. Los terceros ajenos al procedimiento, es decir, que no participaron del proceso de participación ciudadana durante la evaluación ambiental del proyecto o actividad, lo que hacen hoy es interponer recursos de protección o acciones de nulidad de derecho público, o bien, solicitar, ante el órgano que calificó el proyecto o actividad, que la RCA sea invalidada para lo cual cuentan con un plazo que puede extenderse hasta dos años de dictada la RCA. Sobre lo último, ha sido la jurisprudencia la que ha establecido diferentes criterios respecto a quiénes pueden ejercer la potestad invalidatoria y en qué casos, de tal modo que se genera incertidumbre y una evidente desigualdad respecto de los reclamantes.

De este modo, la propuesta de establecer un plazo máximo de 30 días para que un tercero ajeno al procedimiento que invoque un interés legítimo ambiental pueda reclamar, constituye un avance frente al plazo de dos años de la invalidación administrativa. Sin embargo, las implicancias prácticas de esta modificación seguramente requerirán de mayor análisis y discusión en el Congreso. Es necesario especificar bien las causales por las cuales procederán los recursos, de modo de evitar una excesiva judicialización, así como definir qué se entenderá por “interés legítimo ambiental, de carácter específico”, de tal modo que se establezcan ciertos contornos respecto al legitimado activo. Asimismo, y según lo señalado anteriormente, dado que actualmente la etapa recursiva concluye en su gran mayoría en la instancia administrativa, debe revisarse si el traspaso de todos estos asuntos a instancias jurisdiccionales es compatible con la organización, funciones y capacidades de los tribunales

8 Artículo 53. Invalidación. La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.

La invalidación de un acto administrativo podrá ser total o parcial. La invalidación parcial no afectará las disposiciones que sean independientes de la parte invalidada.

El acto invalidatorio será siempre impugnabile ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario.

ambientales, para evitar una sobrecarga de los mismos.

4. Divisibilidad de la RCA

El proyecto propone que las RCA serán divisibles, previa propuesta del titular a la Comisión de Evaluación Macrozonal respectiva, según quien haya dictado dicha resolución, en aquellos casos en que sea posible diferenciar los impactos ambientales en la propuesta de división, así como las medidas y condiciones asociadas y su seguimiento ambiental, para la eventual división de la RCA.

Dicha modificación tiene una enorme importancia práctica y es muy relevante en procesos de financiamiento y ejecución de los proyectos. Asimismo, permite que, aun cuando el proyecto se haya evaluado como un todo, cada empresa se haga responsable del cumplimiento de las obligaciones que le competen.

5. Modificaciones a las tipologías de proyectos que ingresan al SEIA

Algunos proyectos que ingresan al SEIA ya cuentan con regulaciones específicas que norman los aspectos ambientales que les corresponde cumplir. De esta manera, hoy son evaluados proyectos cuyo impacto ambiental no necesariamente es significativo y que en algunos casos están adecuadamente regulados sectorialmente. El ingreso de estos proyectos contribuye a colapsar el sistema.

De esta manera, se valoran algunas modificaciones introducidas a las tipologías de

proyectos que ingresan al SEIA, sin perjuicio de que podrían estudiarse algunas adicionales.

PROPUESTAS PARA MEJORAR

LA GESTION DEL SEIA

Muchas de las críticas al SEIA tienen su origen más bien en aspectos de gestión. En este sentido, LyD ha identificado las siguientes recomendaciones⁹:

1. Utilizar la plataforma electrónica del SEIA como mecanismo de control interno de los tiempos que se toman los distintos participantes del proceso. Identificar y solucionar los cuellos de botella permitiría que funcione mejor el concepto de “ventanilla única” del SEIA y que se reduzcan los plazos de aprobación.
2. Mejorar las capacidades y aumentar la autonomía del SEA. En esta línea también sería interesante evaluar la conveniencia de crear un Consejo Consultivo independiente y no-vinculante. Este sería financiado con aportes públicos y privados. El titular del proyecto podría recurrir al Consejo Consultivo con el fin de contar con una evaluación independiente que entregue mayores antecedentes técnicos antes de entrar al proceso de evaluación por parte de la Comisión Macrozonal.
3. Mejorar las capacidades y revisar los incentivos de los fiscalizadores de la Superintendencia del Medio Ambiente para focalizarse en los aspectos relevantes desde el punto de vista medioambiental.

⁹ Véanse más detalles en Lira, J. (2017). Revisión y Propuestas para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile, Serie Informe Económico 267, Libertad y Desarrollo.

4. Adoptar, tal como lo han hecho otros países, una etapa inicial de “screening” y “scoping”. El primero se refiere a un proceso de racionalización en el que se filtra qué ha de evaluarse, y el segundo establece una focalización en el alcance de los aspectos relevantes del proyecto desde un punto de vista del impacto ambiental. Asimismo, sería pertinente realizar una revisión profunda de la metodología que determina el ingreso de los

proyectos al SEIA, más allá de correcciones menores a la tipología de proyectos utilizada en la actualidad.

5. Permitir evaluar distintas alternativas del proyecto (en cuanto a localización y otros aspectos de diseño técnico) dentro de un mismo EIA. Así se evita que un cambio al proyecto implique entrar nuevamente al sistema ■■■

V. COMENTARIOS DE MÉRITO ESPECÍFICOS

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	COMENTARIOS
<p>Eliminación del límite de 3MW para centrales hidroeléctricas.</p> <p>Artículo 1° N°4, letra a): Reemplaza la letra c) del artículo 10 de la LGBMA por la siguiente: Deberá someterse a evaluación de impacto ambiental "c) Centrales o plantas generadoras de energía eléctrica, según sus magnitudes, las cuales se determinarán sobre la base de los impactos que produzca el tipo de tecnología que utilicen, comprendiendo prospecciones con fines geotérmicos."</p>	<p>La modificación es concordante con el proyecto pro inversión ingresado por el Ejecutivo, en el sentido que respecto de las generadoras de energía eléctrica, se elimina el límite legal actualmente contemplado para someterse al SEIA (3 megavatios).</p> <p>Es muy importante hacer intervenir al tipo de tecnología empleada, pues las tecnologías limpias deberían tener un tratamiento más favorable que las de otro tipo. No obstante, la norma parece poco clara en cuanto a su significado y alcance, tal como está formulada, pues no se observa un elemento objetivo para su aplicación.</p> <p>Es conveniente revisarla, para que no se preste para arbitrariedades.</p>
<p>Carácter vinculante de la consulta.</p> <p>Artículo 1° N°5- Incorporase un artículo 11 quáter a la LGBMA. Los proponentes o titulares de los proyectos podrán formular consulta previa al SEA respecto a si un determinado proyecto o actividad debe someterse al SEIA. Lo mismo podrán hacer respecto a la modificación de un proyecto. La respuesta a esa consulta será vinculante.</p>	<p>Dicha modificación también es concordante con el proyecto pro inversión ingresado por el Ejecutivo.</p> <p>Es muy positiva la proposición de permitir la consulta previa al SEA sobre la procedencia de someter o no un proyecto al SEIA, y que su respuesta tenga carácter vinculante.</p> <p>En este sentido importa precisar que el carácter obligatorio de la respuesta produce efectos tanto si es positiva como negativa. Es decir, si se responde que no debe estar sujeto al SEIA, no podría otra autoridad estimar lo contrario.</p>
<p>Eliminación de la Potestad Invalidatoria.</p> <p>Artículo 1° N°5- Incorporase un nuevo artículo 17 a la LGBMA. Los órganos de la</p>	<p>Dicha modificación viene a dar mayor certeza jurídica y a evitar la desigualdad que se da hoy entre reclamantes de una RCA, eliminando la</p>

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	COMENTARIOS
<p><i>Administración del Estado no podrán, ya sea de oficio o a petición de parte, ejercer la potestad invalidatoria del artículo 53 de la Ley N°19.880 respecto de las RCA, de las resoluciones que resuelven el procedimiento de revisión de la RCA, así como cualquier otra resolución dictada dentro del SEIA.</i></p>	<p>posibilidad de solicitar la invalidación administrativa. Hoy, terceros ajenos al SEIA de un proyecto, solicitan ante el órgano que calificó el proyecto o actividad, que la RCA sea invalidada para lo cual cuentan con un plazo que puede extenderse hasta dos años de dictada la RCA. Sobre lo último, ha sido la jurisprudencia la que ha establecido diferentes criterios respecto a quiénes pueden ejercer la potestad invalidatoria y en qué casos, de tal modo que se genera incertidumbre y una evidente desigualdad respecto de los reclamantes.</p>
<p>Divisibilidad de la RCA. Artículo 1° N°24. <i>Se reemplaza el artículo 25 sexies por uno del siguiente tenor: las RCA serán divisibles, previa propuesta del titular a la Comisión de Evaluación Macrozonal respectiva, según quien haya dictado dicha resolución, en aquellos casos en que sea posible diferenciar los impactos ambientales en la propuesta de división, así como las medidas y condiciones asociadas y su seguimiento ambiental, para la eventual división de la RCA.</i></p>	<p>La modificación introducida es acertada, toda vez que viene a corregir una de las grandes deficiencias que tiene el sistema actual, que estanca el desarrollo de proyectos por existir reclamaciones sobre algunos puntos.</p> <p>Ahora bien, debe velarse porque la división no implique afectación de objetivos de protección ambiental tenidos a la vista durante la evaluación.</p>

VI. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

Artículo primero.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente:

1. Intercálanse, en el artículo 8°, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Todos los permisos ambientales sectoriales que de acuerdo con la legislación vigente deban emitir los órganos de la Administración del Estado respecto de proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, serán otorgados por la Comisión de Evaluación Macrozonal establecida en el artículo 86¹⁰, mediante la Resolución de Calificación Ambiental favorable que así lo disponga, quedando exentos de toda otra tramitación sectorial posterior.

Los permisos referidos en los incisos anteriores, se otorgarán dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, siempre que sean compatibles con los plazos y procedimientos de aquel y de acuerdo a lo señalado en el reglamento.”¹¹.

10 Véase más adelante el N°35 del artículo 2° del proyecto de ley.

11 El artículo 8° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 8°.- Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la presente ley.

Todos los permisos o pronunciamientos de carácter ambiental, que de acuerdo con la legislación vigente deban o puedan emitir los organismos del Estado, respecto de proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación, serán otorgados a través de dicho sistema, de acuerdo a las normas de este párrafo y su reglamento.

Todos los permisos ambientales sectoriales que de acuerdo con la legislación vigente deban emitir los órganos de la Administración del Estado respecto de proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, serán otorgados por la Comisión de Evaluación Macrozonal establecida en el artículo 86, mediante la Resolución de Calificación Ambiental favorable que así lo disponga, quedando exentos de toda otra tramitación sectorial posterior.

Los permisos referidos en los incisos anteriores, se otorgarán dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, siempre que sean compatibles con los plazos y procedimientos de aquel y de acuerdo a lo señalado en el reglamento.

Sin perjuicio de los permisos o pronunciamientos sectoriales, siempre se requerirá el informe del Gobierno Regional, del Municipio respectivo y la autoridad marítima competente, cuando corresponda, sobre la compatibilidad territorial del proyecto presentado.

Los proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental deberán considerar siempre las políticas y planes evaluados estratégicamente, de conformidad a lo señalado en el Párrafo 1° bis de este título.

Corresponderá al Servicio de Evaluación Ambiental, la administración del sistema de evaluación de impacto ambiental, así como la coordinación de los organismos del Estado involucrados en el mismo, para los efectos de obtener los permisos o pronunciamientos a que se refiere el inciso anterior.

2. Reemplázase, en el artículo 9º¹², los incisos segundo y tercero, por los siguientes:

“Las Declaraciones de Impacto Ambiental o los Estudios de Impacto Ambiental se presentarán, para obtener las autorizaciones correspondientes, ante la Dirección Macrozonal en que se realizarán las obras materiales que contemple el proyecto, con anterioridad a su ejecución. En caso que el proyecto genere impactos ambientales en distintas macrozonas, el proyecto será evaluado por la macrozona en que se desarrollen las obras materiales, solicitando informe a los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental de las regiones que correspondiere.

En el caso de aquellos proyectos en que las obras materiales se encuentren emplazadas en dos o más macrozonas, corresponderá al Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental determinar la macrozona que le corresponderá evaluar ambientalmente el proyecto, sin perjuicio de su facultad de radicar la competencia de la evaluación de impacto ambiental en la Dirección Ejecutiva del Servicio cuando lo estime pertinente, a través de resolución fundada.”.

3. Reemplázase el artículo 9º ter¹³, por el siguiente:

“Artículo 9 ter.- Los proponentes de los proyectos o actividades, en sus Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental, deberán describir la forma en que tales proyectos o actividades se relacionan con los planes de desarrollo comunal. Asimismo, deberán hacerlo respecto de la compatibilidad de sus proyectos o actividades con los planes regionales de ordenamiento territorial.

La Dirección Macrozonal de Evaluación Ambiental deberá siempre solicitar pronunciamiento a las municipalidades del área de influencia del proyecto, con el objeto de que éstas señalen si el proyecto o actividad se relaciona con los planes de desarrollo comunal, así como a los Gobiernos Regionales que correspondan, a fin de que se pronuncien sólo respecto de la compatibilidad requerida en el inciso anterior.”.

- 12 Artículo 9º vigente (se subrayan los incisos que se reemplazan):

Artículo 9º.- El titular de todo proyecto o actividad comprendido en el artículo 10 deberá presentar una Declaración de Impacto Ambiental o elaborar un Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda. Aquéllos no comprendidos en dicho artículo podrán acogerse voluntariamente al sistema previsto en este párrafo.

Las Declaraciones de Impacto Ambiental o los Estudios de Impacto Ambiental se presentarán, para obtener las autorizaciones correspondientes, ante la Comisión establecida en el artículo 86 o Comisión de Evaluación en que se realizarán las obras materiales que contemple el proyecto o actividad, con anterioridad a su ejecución. En los casos en que la actividad o proyecto pueda causar impactos ambientales en zonas situadas en distintas regiones, las Declaraciones o los Estudios de Impacto Ambiental deberán presentarse ante el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental.

En caso de dudas corresponderá al Director del Servicio de Evaluación Ambiental determinar si el proyecto o actividad afecta zonas situadas en distintas regiones, de oficio o a petición de una o más Comisiones de Evaluación o del titular del proyecto o actividad.

El proceso de revisión de las Declaraciones de Impacto Ambiental y de calificación de los Estudios de Impacto Ambiental considerará la opinión fundada de los organismos con competencia ambiental, en las materias relativas al respectivo proyecto o actividad, para lo cual la Comisión de Evaluación o el Director Ejecutivo del Servicio, en su caso, requerirá los informes correspondientes.

Los pronunciamientos de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, deberán ser fundados y formulados dentro de las esferas de sus respectivas competencias.

- 13 Artículo 9º ter vigente:

Artículo 9º ter.- Los proponentes de los proyectos o actividades, en sus Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental, deberán describir la forma en que tales proyectos o actividades se relacionan con las políticas, planes y programas de desarrollo regional, así como con los planes de desarrollo comunal.

La Comisión señalada en el artículo 86 deberá siempre solicitar pronunciamiento al Gobierno Regional respectivo, así como a las municipalidades del área de influencia del proyecto, con el objeto de que éstos señalen si el proyecto o actividad se relacionan con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y con los planes de desarrollo comunal, respectivamente.

4. Modifícase el artículo 10, de la siguiente manera:

a) Reemplázase la letra c), por la siguiente:

“c) Centrales o plantas generadoras de energía eléctrica, según sus magnitudes, las cuales se determinarán sobre la base de los impactos que produzca el tipo de tecnología que utilicen, comprendiendo prospecciones con fines geotérmicos.”.

b) Reemplázase el literal e) por el siguiente:

“e) Aeropuertos, terminales de buses, camiones y ferrocarriles, vías férreas y autopistas;”.

c) Agrégase en el literal h), a continuación de la frase “zonas declaradas latentes o saturadas” la frase “que no cuenten con un plan de descontaminación o prevención vigente, según corresponda.”.

d) Elimínase en el literal n) la frase “explotación intensiva”.

e) En el literal ñ), elimínase la frase “transporte, disposición o reutilización habituales”.

f) Reemplázase el literal o), por el siguiente:

“o) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos asociados a las obras antes dichas o plantas industriales, sistemas de tratamiento o valorización de residuos industriales líquidos o sólidos y las operaciones de manejo de residuos peligrosos;”.

g) En el literal q), reemplázase el punto y la conjunción “y” final por punto y coma.

h) En el literal r), reemplázase el punto final por punto y coma seguido de la conjunción “y”.

i) Incorpórase el siguiente literal s), nuevo:

“s) Plantas desaladoras o desalinizadoras.”¹⁴.

5. Incorpórase el siguiente artículo 11 quáter, nuevo:

“Artículo 11 quáter.- Los proponentes o titulares de proyectos podrán dirigirse al Director Macrozonal o al Director Ejecutivo del Servicio, según corresponda, a fin de solicitar un pronunciamiento sobre si, en base a los antecedentes proporcionados al efecto, un proyecto o actividad, debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, podrán dirigirse los proponentes o titulares a las mismas autoridades, en caso que requieran efectuar cambios a un proyecto, sea que cuente o no con una Resolución de Calificación Ambiental favorable, a fin de solicitar un pronunciamiento sobre si, en base a los antecedentes proporcionados al efecto, dichos cambios constituyen o no una modificación de proyecto.

El pronunciamiento a que se refiere el inciso anterior será siempre vinculante para efectos del seguimiento, fiscalización y sanción ambiental.”.

14 El artículo 10 con las modificaciones propuestas se incluye, por su extensión, en un **ANEXO I**.

6. Introdúcense, en el artículo 12, las siguientes modificaciones:
 - a) Reemplázase, en el literal f), la coma y conjunción “y” por punto y coma.
 - b) Reemplázase, en el literal g), el punto final por un punto y coma.
 - c) Incorpórase el siguiente literal h), nuevo:

“h) La indicación de los permisos ambientales sectoriales y toda la información necesaria para la obtención de dichos permisos; y”.
 - d) Incorpórase el siguiente literal i), nuevo:

“i) Los Términos de Referencia Ambientales como resultado de la etapa de participación ciudadana anticipada.”¹⁵.

7. Modifícase el artículo 12 bis, de la siguiente forma:
 - a) Reemplázase, en el literal c), la coma y conjunción “y”, por punto y coma.
 - b) Reemplázase el literal d), por el siguiente:

“d) La indicación de los permisos ambientales sectoriales y toda la información necesaria para la obtención de dichos permisos; y”.
 - c) Incorpórase el siguiente literal e), nuevo:

“e) Los Términos de Referencia Ambientales como resultado de la etapa de participación ciudadana anticipada, en caso de haberla realizado voluntariamente”¹⁶.

15 El artículo 12 (encabezamiento):

Artículo 12.- Los estudios de Impacto Ambiental considerarán las siguientes materias:

[h)...

[i)...

16 El artículo 12 bis que daría con la siguiente redacción:

Artículo 12 bis.- Las declaraciones de Impacto Ambiental considerarán las siguientes materias:

- a) Una descripción del proyecto o actividad;
- b) Los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental;
- c) La indicación normativa ambiental aplicable, y la forma en la que se cumplirá; y
- d) La indicación de los permisos ambientales sectoriales y toda la información necesaria para la obtención de dichos permisos; y
- e) Los Términos de Referencia Ambientales como resultado de la etapa de participación ciudadana anticipada, en caso de haberla realizado voluntariamente.

8. Reemplázase, en el artículo 13, la letra a), por la siguiente:

“a) Detalle de tipologías de ingreso y la lista de los permisos ambientales sectoriales, de los requisitos para su otorgamiento y de los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento”¹⁷.

9. Derógase el artículo 13 bis¹⁸.

10. Reemplázase el artículo 14 bis¹⁹, por el siguiente:

“Artículo 14 bis.- La tramitación de la evaluación de impacto ambiental de proyectos, así como todo otro procedimiento llevado a cabo por el Servicio de Evaluación Ambiental, se realizará a través de medios electrónicos, de acuerdo a las condiciones que establezca el Servicio de Evaluación Ambiental en el respectivo reglamento, las que serán obligatorias para todos los actores participantes.”.

17 El artículo 13 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 13.- Para los efectos de elaborar y calificar un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, el proponente, el Servicio de Evaluación Ambiental y los órganos de la administración del Estado competentes, en su caso, se sujetarán a las normas que establezca el reglamento.

Este reglamento será dictado mediante decreto supremo, por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente, y contendrá, a lo menos, lo siguiente:

- a) Detalle de tipologías de ingreso y la lista de los permisos ambientales sectoriales, de los requisitos para su otorgamiento y de los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento.
- b) Contenidos mínimos detallados para la elaboración de los Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental, conforme con lo dispuesto en los artículos 11, 12, 12 bis, 13 bis y 18, según corresponda, y
- c) Procedimiento administrativo para la evaluación de impacto ambiental.

18 Artículo 13 bis, que se deroga:

Artículo 13 bis.- Los proponentes deberán informar a la autoridad ambiental si han establecido, antes o durante el proceso de evaluación, negociaciones con los interesados con el objeto de acordar medidas de compensación o mitigación ambiental. En el evento de existir tales acuerdos, éstos no serán vinculantes para la calificación ambiental del proyecto o actividad.

19 Artículo 14 bis, que se deroga por sustitución:

Artículo 14 bis.- El procedimiento de evaluación de impacto ambiental y los actos administrativos que se originen de él, podrán expresarse a través de medios electrónicos, conforme a las normas de la ley N° 19.799 y su reglamento, y a lo previsto en este artículo. Sin perjuicio de lo anterior, no se considerarán faltas u omisiones del titular aquellas actuaciones que por fallas del medio electrónico no puedan ejecutarse o acreditarse oportunamente dentro del procedimiento, debiendo adoptarse las medidas necesarias por el Servicio de Evaluación Ambiental para solucionar prontamente dichas fallas sin perjuicio para el titular.

Se entenderá que el titular de un proyecto acepta la utilización de técnicas y medios electrónicos en todas las actuaciones del procedimiento que le afecten, desde que ingrese su Estudio o Declaración, salvo que expresamente solicite lo contrario.

Las observaciones que formularen las organizaciones ciudadanas y personas naturales a que se refieren los artículos 28 y 30 bis, podrán expresarse a través de medios electrónicos, conforme a las normas generales.

Sin embargo, no se emplearán medios electrónicos respecto de aquellas actuaciones que por su naturaleza o por expresa disposición legal deben efectuarse por otro medio.

11. Introdúcense en el artículo 15, las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “será acompañada de los permisos o pronunciamientos ambientales que puedan ser otorgados en dicha oportunidad por los organismos del Estado” por la expresión “será acompañada de todos los permisos ambientales aplicables”.

b) Reemplázase el inciso final, por el siguiente:

“En los casos que exista declaración de estado de excepción constitucional, los proyectos o actividades que deban ser implementados de manera urgente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, quedarán eximidos de ingresar previamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sin perjuicio de su posterior regularización.”²⁰.

12. Modifícase el Artículo 15 bis de la siguiente manera:

a) Reemplázase en los incisos primero y tercero la frase “Director Regional” por “Director Macrozonal”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Se entenderá por información relevante aquella relativa a la descripción de las partes, obras y acciones indispensables del proyecto, como una unidad; por información esencial, aquella indispensable para determinar la procedencia o descartar los efectos, características o circunstancias del artículo 11°. El reglamento deberá precisar el tipo de información, así como las partes, obras y acciones, que se consideren indispensables de un proyecto o actividad.”.

c) Reemplázase el antiguo inciso segundo, por el siguiente inciso tercero, nuevo:

“La resolución a que se refiere el inciso primero deberá ser fundada explicitando la falta de información relevante o esencial y, sólo podrá dictarse dentro de los primeros cuarenta días contados desde la presentación del respectivo Estudio de Impacto Ambiental. Transcurrido este plazo, no procederá el rechazo del estudio utilizando como fundamento la insuficiencia sustantiva de línea de base, debiendo completarse su evaluación.”²¹.

20 El artículo 15 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 15.- La Comisión establecida en el artículo 86 o el Director Ejecutivo, en su caso, tendrá un plazo de ciento veinte días para pronunciarse sobre el Estudio de Impacto Ambiental. La calificación favorable sobre un Estudio de Impacto Ambiental será acompañada de todos los permisos ambientales aplicables.

En caso que la Comisión establecida en el artículo 86 o el Director Ejecutivo, según corresponda, no pueda pronunciarse sobre el Estudio de Impacto Ambiental en razón de la falta de otorgamiento de algún permiso o pronunciamiento sectorial ambiental, requerirá al organismo del Estado responsable para que, en el plazo de quince días, emita el permiso o pronunciamiento. Vencido este plazo, el permiso o pronunciamiento faltante se tendrá por otorgado favorablemente.

En los casos que exista declaración de estado de excepción constitucional, los proyectos o actividades que deban ser implementados de manera urgente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, quedarán eximidos de ingresar previamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sin perjuicio de su posterior regularización.

21 El artículo 15 bis quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 15 bis.- Si el Estudio de Impacto Ambiental carece de información relevante o esencial para su evaluación que no pudiese ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, el Director Macrozonal o el Director Ejecutivo, así lo declarará mediante resolución fundada, ordenando devolver los antecedentes al titular y poniendo término al procedimiento.

Se entenderá por información relevante aquella relativa a la descripción de las partes, obras y acciones indispensables del proyecto, como una unidad; por información esencial, aquella indispensable para determinar la procedencia o descartar los efectos, características o circunstancias del artículo 11°. El reglamento deberá precisar el tipo

13. Agrégase el siguiente artículo 17:

“Artículo 17.- Los órganos de la Administración del Estado no podrán, ya sea de oficio o petición de interesado, ejercer la potestad invalidatoria del artículo 53²² de la ley N° 19.880 respecto de las resoluciones de calificación ambiental, de las resoluciones que resuelvan el procedimiento del artículo 25 quinquies²³, así como cualquier otra resolución dictada dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.”.

14. Introdúcense, en el Artículo 18 bis, las siguientes modificaciones:

a) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Se entenderá por información relevante aquella relativa a la descripción de las partes, obras y acciones indispensables del proyecto, como una unidad; por información esencial, aquella indispensable para determinar la procedencia o descartar los efectos, características o circunstancias del artículo 11²⁴. El reglamento deberá precisar el tipo de información, así como las partes, obras y acciones que se consideren indispensable de un proyecto o actividad”.

de información, así como las partes, obras y acciones, que se consideren indispensables de un proyecto o actividad.

La resolución a que se refiere el inciso primero deberá ser fundada explicitando la falta de información relevante o esencial y, sólo podrá dictarse dentro de los primeros cuarenta días contados desde la presentación del respectivo Estudio de Impacto Ambiental. Transcurrido este plazo, no procederá el rechazo del estudio utilizando como fundamento la insuficiencia sustantiva de línea de base, debiendo completarse su evaluación.

Los organismos a los que se refiere el inciso cuarto del artículo 9°, deberán comunicar, tan pronto le sea requerido su informe, al Director Macrozonal o al Director Ejecutivo si en los Estudios sometidos a su conocimiento se ha constatado el defecto previsto en este artículo.

En contra de la resolución que se dicte sólo podrá deducirse recurso de reposición dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación. El recurso deberá resolverse dentro del plazo de veinte días.

22 Artículo 53. Invalidación. La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.

El acto invalidatorio será siempre impugnante ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario.

23 Véase, más adelante, el N°23 del artículo 1° del proyecto de ley.

24 Artículo 11.- Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias:

- a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos;
- b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire;
- c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos;
- d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar;
- e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, y
- f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.

Para los efectos de evaluar el riesgo indicado en la letra a) y los efectos adversos señalados en la letra b), se considerará lo establecido en las normas de calidad ambiental y de emisión vigentes. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que señale el reglamento.

- b) Reemplázase el antiguo inciso segundo, por el siguiente inciso tercero, nuevo:

“La resolución a que se refiere el inciso primero deberá ser fundada, explicitando la falta de información relevante o esencial y, sólo podrá dictarse dentro de los primeros treinta días contados desde la presentación de la respectiva Declaración de Impacto Ambiental. Transcurrido este plazo, no procederá devolver o rechazar la Declaración por las causales señaladas, debiendo completarse su evaluación.”²⁵.

15. Derógase el artículo 18 ter²⁶.

16. Derógase el artículo 18 quáter²⁷.

- 25 El artículo 18 bis quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 18 bis.- Si la Declaración de Impacto Ambiental carece de información relevante o esencial para su evaluación que no pudiese ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, o si el respectivo proyecto o actividad requiere de un Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda, así lo declarará mediante resolución fundada, ordenando devolver los antecedentes al titular y poniendo término al procedimiento.

Se entenderá por información relevante aquella relativa a la descripción de las partes, obras y acciones indispensables del proyecto, como una unidad; por información esencial, aquella indispensable para determinar la procedencia o descartar los efectos, características o circunstancias del artículo 11. El reglamento deberá precisar el tipo de información, así como las partes, obras y acciones que se consideren indispensable de un proyecto o actividad.

La resolución a que se refiere el inciso primero deberá ser fundada, explicitando la falta de información relevante o esencial y, sólo podrá dictarse dentro de los primeros treinta días contados desde la presentación de la respectiva Declaración de Impacto Ambiental. Transcurrido este plazo, no procederá devolver o rechazar la Declaración por las causales señaladas, debiendo completarse su evaluación.

- 26 Artículo 18 ter, que se deroga:

Artículo 18 ter.- Los titulares, al presentar una Declaración de Impacto Ambiental, podrán incluir, a su costo, el compromiso de someterse a un proceso de evaluación y certificación de conformidad, respecto del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y de las condiciones sobre las cuales se califique favorablemente el proyecto o actividad. En este caso, dicha Declaración deberá ser calificada en un plazo máximo de treinta días, sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente.

Para estos efectos, la Superintendencia del Medio Ambiente llevará un registro de las personas naturales y jurídicas acreditadas, que realicen la evaluación y certificación de conformidad de las Resoluciones de Calificación Ambiental. El reglamento determinará los requisitos, condiciones y procedimientos necesarios para su administración y funcionamiento.

- 27 Artículo 18 quáter, que se deroga:

Artículo 18 quáter.- Si el titular del proyecto es una empresa que según la ley califica como de menor tamaño y debe presentar una Declaración de Impacto Ambiental podrá comprometer a su costo, someterse a un proceso de evaluación y certificación de conformidad, respecto del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto o actividad. En este caso, la Comisión establecida en el artículo 86 o el Director Ejecutivo, en su caso, observará el siguiente procedimiento:

- a) Verificará si el proyecto o actividad requiere de un Estudio de Impacto Ambiental, en el plazo de 10 días contado desde la presentación de la Declaración.
- b) En caso de no requerir un Estudio de Impacto Ambiental, procederá al registro de la Declaración, siempre que el proyecto se encuentre localizado en un área regulada por instrumentos de planificación territorial vigentes y no genere cargas ambientales.
- c) Si el proyecto o actividad se localiza en un área no regulada por instrumentos de planificación territorial vigentes y no genera cargas ambientales, abrirá un período de participación ciudadana, en el que citará a una audiencia especial a lo menos a tres organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica vigente, cuyo domicilio legal se encuentre en aquellas comunas en que el proyecto o actividad se emplazará. Dicho período no se extenderá más de 10 días, debiendo levantarse un acta por un ministro de fe en donde consten los compromisos con la comunidad. Finalizada dicha etapa, procederá a su registro.
- d) El registro consistirá en la anotación del proyecto o actividad, en el que debe constar el lugar del emplazamiento, la caracterización de la actividad, tiempo de ejecución de las obras y el proyecto, indicadores de cumplimiento de la certificación de conformidad y compromisos asumidos por el proponente con la comunidad.
- e) Realizado el registro una copia de la Declaración, que contendrá las observaciones de la ciudadanía, cuando correspondiere, será visada por el Servicio de Evaluación Ambiental y hará las veces de Resolución de Calificación Ambiental para todos los efectos legales.

17. Modifícase el artículo 19 del siguiente modo:

- a) Reemplázase en el inciso primero la frase “Comisión establecida en el artículo 86” por “Director Macrozonal.”
- b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “Director regional” por “Director Macrozonal”²⁸.

18. Modifícase el artículo 19 bis de la siguiente forma:

- a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “15, 18 y 18 ter” por “15 y 18”.
- b) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “Director Regional” por “Director Macrozonal”.

19. Derógase el artículo 20²⁹.

28 El artículo 19 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 19.- Si [el] Director Macrozonal o el Director Ejecutivo, en su caso, constatare la existencia de errores, omisiones o inexactitudes en la Declaración de Impacto Ambiental, podrá solicitar las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que estime necesarias, otorgando un plazo para tal efecto al interesado, suspendiéndose de pleno derecho, en el intertanto, el término que restare para finalizar el procedimiento de evaluación de la respectiva Declaración. El proponente podrá solicitar la extensión del plazo otorgado para cada suspensión hasta por dos veces.

El Director Macrozonal o el Director Ejecutivo, en su caso, podrá, en casos calificados y debidamente fundados, ampliar el plazo señalado en el inciso tercero del artículo 18, por una sola vez, y hasta por treinta días.

Se rechazarán las Declaraciones de Impacto Ambiental cuando no se subsanaren los errores, omisiones o inexactitudes de que adolezca o si el respectivo proyecto o actividad requiere de un Estudio de Impacto Ambiental o cuando no se acredite el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley.

El reglamento establecerá la forma en que se notificará al interesado la decisión de la Comisión establecida en el artículo 86 o el Director Ejecutivo, en su caso, sobre la Declaración de Impacto Ambiental.

29 Artículo 20, que se deroga:

Artículo 20.- En contra de la resolución que niegue lugar, rechace o establezca condiciones o exigencias a una Declaración de Impacto Ambiental, procederá la reclamación ante el Director Ejecutivo. En contra de la resolución que rechace o establezca condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, procederá la reclamación ante un comité integrado por los Ministros del Medio Ambiente, que lo presidirá, y los Ministros de Salud; de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Agricultura; de Energía, y de Minería. Estos recursos deberán ser interpuestos por el responsable del respectivo proyecto, dentro del plazo de treinta días contado desde la notificación de la resolución recurrida. La autoridad competente resolverá, mediante resolución fundada, en un plazo fatal de treinta o sesenta días contado desde la interposición del recurso, según se trate de una Declaración o un Estudio de Impacto Ambiental.

Con el objeto de resolver las reclamaciones señaladas en el inciso primero, el Director Ejecutivo y el Comité de

Ministros podrá solicitar a terceros, de acreditada calificación técnica en las materias de que se trate, un informe independiente con el objeto de ilustrar adecuadamente la decisión. El reglamento establecerá cómo se seleccionará a dicho comité y las condiciones a las que deberá ajustarse la solicitud del informe.

En el caso de los Estudios de Impacto Ambiental, el Comité de Ministros deberá solicitar siempre informe a los organismos sectoriales que participaron de la evaluación ambiental.

De lo resuelto mediante dicha resolución fundada se podrá reclamar, dentro del plazo de treinta días contado desde su notificación, ante el Tribunal Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 y siguientes de esta ley.

La resolución que niegue lugar o que rechace o establezca condiciones o exigencias a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, será notificada a todos los organismos del Estado que sean competentes para resolver sobre la realización del respectivo proyecto o actividad.

20. Elimínase, en el artículo 21, el inciso segundo³⁰.

21. Introdúcense, en el artículo 24, las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase el inciso segundo, por el siguiente:

“Si la resolución es favorable, certificará que se cumple con todos los permisos ambientales y sectoriales aplicables.”

b) Elimínase el inciso tercero.

c) Elimínase el inciso cuarto.

d) Reemplázase, en el inciso sexto, que pasa a ser el cuarto, la expresión “construcción y ejecución del mismo” por la siguiente: “construcción, ejecución y cierre del mismo”.

e) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“En contra de la Resolución de Calificación Ambiental sólo procederá reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental. En cuanto a los recursos administrativos, sólo procederá el recurso de aclaración o rectificación que podrá presentar el titular de un proyecto o actividad ante la Dirección Ejecutiva del Servicio dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la resolución cuya aclaración o rectificación se solicita, con el sólo fin de realizar una revisión material y de congruencia que permita aclarar la resolución recurrida en esos términos, sin que ello importe una revisión de la evaluación de impacto ambiental. El mencionado plazo no suspende el plazo para reclamar de la Resolución de Calificación Ambiental ante el Tribunal Ambiental. La Dirección Ejecutiva del Servicio, deberá resolver el mencionado recurso dentro de los 60 días siguientes.”³¹

30 El artículo 21 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 21.- Si se rechaza una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, el responsable del proyecto o actividad podrá presentar una nueva Declaración o Estudio.

~~Con todo, el nuevo ingreso no podrá materializarse sino hasta que se resuelva el recurso de reclamación a que se refiere el inciso primero del artículo 20 de esta ley, o hubiere quedado ejecutoriada la sentencia que se pronuncie sobre la reclamación establecida en el inciso cuarto del mismo artículo.~~

31 El artículo 24 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 24.- El proceso de evaluación concluirá con una resolución que califica ambientalmente el proyecto o actividad, la que deberá ser notificada a las autoridades administrativas con competencia para resolver sobre la actividad o proyecto, sin perjuicio de la notificación a la parte interesada.

Si la resolución es favorable, certificará que se cumple con todos los permisos ambientales y sectoriales aplicables.

~~Si, en cambio, la resolución es desfavorable, estas autoridades quedarán obligadas a denegar las correspondientes autorizaciones o permisos, en razón de su impacto ambiental, aunque se satisfagan los demás requisitos legales, en tanto no se les notifique de pronunciamiento en contrario.~~

~~Los organismos del Estado a los que corresponda otorgar o pronunciarse sobre los permisos ambientales sectoriales a que se refiere esta ley, deberán informar a la Superintendencia del Medio Ambiente cada vez que se les solicite alguno de ellos, indicando si ha adjuntado o no una resolución de calificación ambiental y los antecedentes que permitan identificar al proyecto o actividad e individualizar a su titular.~~

En los casos que la Superintendencia detecte que una solicitud de permiso ambiental sectorial recae sobre un proyecto o actividad que de acuerdo a esta ley deba ser objeto de una evaluación de impacto ambiental previa y que no cuenta con la respectiva resolución de calificación ambiental aprobatoria, lo comunicará al organismo sectorial que corresponda, el que deberá abstenerse de otorgar el permiso o autorización en tanto no se acredite el cumplimiento de dicha exigencia, informando de ello al Servicio de Evaluación Ambiental.

El titular del proyecto o actividad, durante la fase de construcción, ejecución y cierre del mismo, deberá someterse estrictamente al contenido de la resolución de calificación ambiental respectiva.

22. Modifícase el artículo 25 de la siguiente manera:

- a) Elimínase, en el inciso primero, la frase “y aquéllas bajo las cuales se otorgarán los permisos que de acuerdo con la legislación deben emitir los organismos del Estado”.
- b) Elimínase el inciso final³².

23. Reemplázase el artículo 25 quinquies³³ por el siguiente:

“Artículo 25 quinquies.- La Resolución de Calificación Ambiental que calificó ambientalmente favorable una Declaración o un Estudio de Impacto Ambiental, podrá ser revisada, excepcionalmente, a petición del titular o de la Superintendencia del Medio Ambiente, cuando ejecutándose el proyecto, las variables ambientales evaluadas en el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental y de acuerdo al monitoreo efectuado, hayan resultado en alguno de los efectos, características o circunstancias contemplados en el artículo 11 de la presente ley, o bien, en el caso de los Estudios de Impacto Ambiental, cuando las variables ambientales, sean o no parte del plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado o no se hayan verificado, todo ello con el objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir dichas situaciones.

Con tal finalidad se deberá instruir un procedimiento administrativo que tendrá como duración 60 días hábiles, el que podrá ser ampliado por 30 días hábiles adicionales, que se iniciará con la notificación al titular de la concurrencia de los requisitos y deberá contemplar: solicitud de informe de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental que participaron de la evaluación; etapa de participación ciudadana por 15 días; informe consolidado de los pronunciamientos de los órganos antes dichos así como de las observaciones ciudadanas; y, solicitud de información al titular, cuando corresponda, suspendiéndose de pleno derecho, en el intertanto, el término que restare para finalizar el procedimiento de revisión excepcional.

[...]

32 El artículo 25 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 25.- El certificado a que se refiere el artículo anterior, establecerá, cuando corresponda, las condiciones o exigencias ambientales que deberán cumplirse para ejecutar el proyecto o actividad ~~y aquéllas bajo las cuales se otorgarán los permisos que de acuerdo con la legislación deben emitir los organismos del Estado:~~

Las condiciones o exigencias ambientales indicadas en el inciso anterior deberán responder a criterios técnicos solicitados por los servicios públicos que hubiesen participado en el proceso de evaluación.

~~Si no se reclamare dentro del plazo establecido en el artículo 20 en contra de las condiciones o exigencias contenidas en el certificado señalado precedentemente, se entenderá que éstas han sido aceptadas, quedando su incumplimiento afecto a las sanciones establecidas en la ley que crea la Superintendencia del Medio Ambiente:~~

33 Artículo 25 quinquies, que se deroga por sustitución:

Artículo 25 quinquies.- La Resolución de Calificación Ambiental podrá ser revisada, excepcionalmente, de oficio o a petición del titular o del directamente afectado, cuando ejecutándose el proyecto, las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado o no se hayan verificado, todo ello con el objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir dichas situaciones.

Con tal finalidad se deberá instruir un procedimiento administrativo, que se inicie con la notificación al titular de la concurrencia de los requisitos y considere la audiencia del interesado, la solicitud de informe a los organismos sectoriales que participaron de la evaluación y la información pública del proceso, de conformidad a lo señalado en la ley N° 19.880.

El acto administrativo que realice la revisión podrá ser reclamado de conformidad a lo señalado en el artículo 20.

La Comisión del artículo 86 calificará, en forma fundada, las medidas que sean necesarias adoptar para corregir las situaciones a que se refiere el inciso primero, las cuales formarán parte de la resolución de calificación ambiental.

El reglamento, deberá precisar el procedimiento administrativo respectivo.”.

24. Reemplázase el artículo 25 sexies³⁴ por el siguiente:

“Artículo 25 sexies.- Las resoluciones de calificación ambiental serán divisibles, previa propuesta del titular a la Comisión de Evaluación Macrozonal respectiva o al Director Ejecutivo, según quien haya dictado dicha resolución, en aquellos casos en que sea posible diferenciar los impactos ambientales en la propuesta de división, así como las medidas y condiciones asociadas y su seguimiento ambiental, para la eventual división de la resolución de calificación ambiental.

Para todos los efectos legales, el o los titulares de las nuevas resoluciones de calificación ambiental serán solidariamente responsables de las posibles infracciones cometidas con anterioridad a la división de la resolución de calificación ambiental original.”.

25. Incorpórase el siguiente artículo 25° septies, nuevo:

“Artículo 25 septies.- El titular de una Resolución de Calificación Ambiental favorable podrá proponer a la Comisión de Evaluación Macrozonal respectiva o al Director Ejecutivo, según quien haya dictado dicha resolución, el establecimiento de un texto refundido, coordinado y sistematizado de dicha resolución, que incorpore las modificaciones de proyecto autorizadas y efectuadas a la misma, así como los pronunciamientos solicitados de conformidad al artículo 11 quáter.³⁵”.

26. Intercálase, a continuación del artículo 25 septies nuevo, el siguiente párrafo 2° bis:

“Párrafo 2° bis.

DE LA PARTICIPACIÓN ANTICIPADA DE LA COMUNIDAD PREVIO AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Artículo 25° octies.- Los proyectos o actividades en que la intención del proponente sea evaluarlos a través de un Estudio de Impacto Ambiental, deberán someterse a una etapa de participación ciudadana en forma previa a su ingreso al procedimiento de evaluación ambiental, lo cual deberá ser informado al Servicio de Evaluación Ambiental, y que tendrá por objeto generar un proceso de diálogo temprano entre comunidad y proponente, con la finalidad de generar un acta y eventuales acuerdos como resultado de dicha participación, todo lo cual deberá ser incorporado

34 Artículo 25 sexies, que de deroga por sustitución:

Artículo 25 sexies.- Cuando una resolución de calificación ambiental sea modificada por una o más resoluciones, el Servicio de oficio o a petición del proponente, podrá establecer el texto refundido, coordinado y sistematizado de dicha resolución. En ejercicio de esta facultad, podrá introducirle los cambios de forma que sean indispensables, sin alterar, en caso alguno, su verdadero sentido y alcance.

35 Véase el N°5 del artículo 1° de este proyecto de ley.

en un documento denominado Términos de Referencia Ambientales, los que servirán de base para la preparación y presentación del Estudio de Impacto Ambiental respectivo, que deberá someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, conforme a las reglas de la presente ley.

Los proyectos o actividades en que la intención del proponente sea evaluarlos a través de una Declaración de Impacto Ambiental, podrán someterse, de manera voluntaria, a la etapa de participación ciudadana en forma previa a su ingreso al procedimiento de evaluación ambiental, lo cual deberá ser informado al Servicio de Evaluación Ambiental, y que tendrá por objeto generar un proceso de diálogo temprano entre comunidad y proponente, con la finalidad de generar un acta y eventuales acuerdos como resultado de dicha participación, todo lo cual deberá ser incorporado en un documento denominado Términos de Referencia Ambientales, que servirá de base para la preparación y presentación de la Declaración de Impacto Ambiental respectiva, que deberá someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, conforme a las reglas de la presente ley.

Una vez expresada por el proponente la decisión de sometimiento a la etapa de Participación Ciudadana Anticipada, la realización será obligatoria.

Artículo 25° nonies.- La etapa de Participación Anticipada de la Comunidad, se realizará por el proponente con el apoyo técnico ambiental del Servicio de Evaluación Ambiental, el que lo realizará mediante las Unidades u oficinas Regionales del artículo 8636.

Para efectos del apoyo técnico ambiental, el Servicio podrá convocar a los organismos del Estado con competencia ambiental, quienes deberán efectuar sus recomendaciones para la futura evaluación de impacto ambiental.

Una guía, elaborada por el Servicio de Evaluación Ambiental, establecerá la metodología para la Participación Ciudadana Anticipada.

Artículo 25° decies.- El proponente deberá publicar en el Diario Oficial y en un diario o periódico de la capital de la región o de circulación nacional, según sea el caso, una convocatoria para participar en la primera reunión. Desde la última publicación previamente indicada, comenzará a regir el plazo para la participación ciudadana anticipada, el que no podrá ser mayor a 18 meses.

La Participación Ciudadana Anticipada, concluirá con un acta suscrita entre los representantes de los partícipes de la etapa que contenga eventuales acuerdos como resultado de dicha participación y los desacuerdos, en caso que los hubiere, lo que deberá ser incorporado en un documento denominado Términos de Referencia Ambientales, el cual será protocolizado y contendrá la siguiente información:

- a) La descripción de la propuesta inicial del proyecto o actividad;
- b) Una sistematización de las actuaciones efectuadas;
- c) Listado de los participantes o sus representantes, según corresponda;
- d) Las materias identificadas como de importancia ambiental por los organismos que participaron en la etapa y sus recomendaciones para la evaluación;
- e) Las preocupaciones manifestadas por los actores involucrados;
- f) El listado de comunidades identificadas en el área de eventual impacto de la propuesta inicial del proyecto o actividad;

- g) El resultado de la etapa de Participación Ciudadana Anticipada con sus eventuales acuerdos voluntarios;
- h) Las eventuales modificaciones efectuadas por el Proponente a su propuesta inicial de proyecto o actividad luego de la etapa de Participación Ciudadana Anticipada, incluyendo localización, diseño, tecnología u otros y;
- i) El aporte económico y social del proyecto definitivo que se va a presentar a evaluación, así como su contexto ambiental.

Una vez protocolizados, los Términos de Referencia Ambientales, deberán ser elevados en consulta al tribunal ambiental competente para su autorización. Una vez autorizados, el documento protocolizado y la copia autorizada de la resolución del tribunal ambiental, deberán ser presentados ante el Servicio de Evaluación Ambiental, para su registro y conocimiento, del cual se publicará su extracto en el Diario Oficial.

El proponente podrá someter su proyecto o actividad al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental dentro del plazo de 2 años siguientes a la publicación del extracto que realiza el Servicio de los señalados términos de referencia ambientales.

Los términos de referencia ambientales serán evaluados como parte integrante del Estudio de Impacto Ambiental y de la Declaración de Impacto Ambiental, en caso que correspondiere, dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.”

27. Modifícase, el artículo 26°, de la siguiente forma:

- a) Reemplázase la frase “Comisión de Evaluación” por “Dirección Macrozonal correspondiente”.
- b) Elimínase la frase final “cuando correspondan”³⁷.

28. Reemplázase en el artículo 28, la frase “La Comisión establecida en el artículo 86” por “la Dirección Macrozonal correspondiente”³⁸.

29. En el artículo 29:

- a) Reemplázase, en el inciso primero, la palabra “sesenta” por “treinta”.
- b) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “esta vez por treinta días”, por la frase “esta vez por veinte días”.

37 El artículo 26 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 26.- Corresponderá a la Dirección Macrozonal correspondiente o el Director Ejecutivo, según el caso, establecer los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad en el proceso de calificación de los Estudios de Impacto Ambiental y de las Declaraciones ~~cuando correspondan~~.

38 Artículo 28, inciso primero, quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 28.- Para los efectos previstos en el artículo 26, la Dirección Macrozonal correspondiente o el Director Ejecutivo ordenará que el interesado publique a su costa en el Diario Oficial y en un diario o periódico de la capital de la región o de circulación nacional, según sea el caso, un extracto visado por ella del Estudio de Impacto Ambiental presentado. Dichas publicaciones se efectuarán dentro de los diez días siguientes a la respectiva presentación.

c) Elimínase el inciso final³⁹.

30. Reemplázase, en el artículo 30, la frase “Las Comisiones de Evaluación” por “Las direcciones macrozonales”⁴⁰.

31. Modifícase, el artículo 30 bis, de la siguiente forma:

- a) Reemplázase en el inciso primero, la frase “Las Direcciones Regionales” por la frase “Las Direcciones Macrozonales”.
- b) Reemplázase, en el inciso primero, la palabra “podrán” por la frase “deberán, previa solicitud de veinte personas naturales directamente afectadas o cuatro organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes”.
- c) Elimínase, en el inciso primero, la frase posterior a la palabra “evaluación”, la cual señala “y se refieran a proyectos que generen cargas ambientales para las comunidades próximas. Todo ello, siempre que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas. Esta solicitud deberá hacerse por escrito y presentarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la publicación en el Diario Oficial del proyecto sometido a Declaración de Impacto Ambiental de que se trate.”, incorporando un punto aparte.
- d) Elimínanse los incisos tercero, quinto y sexto⁴¹.

39 Artículo 29.- Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, ante el organismo competente, para lo cual dispondrán de un plazo de treinta días, contado desde la respectiva publicación del extracto.

Si durante el procedimiento de evaluación el Estudio de Impacto Ambiental hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente al proyecto, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por veinte días, período en el cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación del Estudio de Impacto Ambiental.

El Reglamento deberá precisar qué tipo de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, según el tipo de proyecto o actividad, serán consideradas como modificaciones sustantivas a los proyectos. El Servicio de Evaluación Ambiental considerará las observaciones como parte del proceso de calificación y deberá hacerse cargo de éstas, pronunciándose fundadamente respecto de todas ellas en su resolución. Dicho pronunciamiento deberá estar disponible en la página web del servicio con a lo menos cinco días de anticipación a la calificación del proyecto.

~~Cualquier persona, natural o jurídica, cuyas observaciones señaladas en los incisos anteriores no hubieren sido debidamente consideradas en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental establecida en el artículo 24, podrá presentar recurso de reclamación de conformidad a lo señalado en el artículo 20, el que no suspenderá los efectos de la resolución.~~

40 El artículo 30, inciso primero, quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 30.- Las direcciones macrozonales o el Director Ejecutivo, en su caso, publicarán el primer día hábil de cada mes, en el Diario Oficial y en un periódico de circulación regional o nacional, según corresponda, una lista de los proyectos o actividades sujetos a Declaración de Impacto Ambiental que se hubieren presentado a tramitación en el mes inmediatamente anterior, con el objeto de mantener debidamente informada a la ciudadanía.

41 El artículo 30 bis quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 30 bis.- ~~Las Direcciones Macrozonales o el Director Ejecutivo, según corresponda, deberán, previa solicitud de veinte personas naturales directamente afectadas o cuatro organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes decretar la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de veinte días, en las Declaraciones de Impacto Ambiental que se presenten a evaluación; y se refieran a proyectos que generen cargas ambientales para las comunidades próximas. Todo ello, siempre que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas. Esta solicitud deberá hacerse por escrito y presentarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la publicación en el Diario~~

32. Incorpórase, en el artículo 83⁴², el siguiente literal i), nuevo:

"i) Dictar instrucciones, órdenes, guías, y criterios de evaluación de impacto ambiental."

33. Reemplázase el artículo 84⁴³, por el siguiente:

"Artículo 84.- El Servicio de Evaluación Ambiental se desconcentrará territorialmente a través de tres direcciones macrozonales.

La Dirección Macrozonal norte, tendrá asiento en la comuna de Antofagasta y tendrá competencia territorial en las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y Coquimbo.

La Dirección Macrozonal centro, con asiento en la comuna de Santiago, tendrá competencia territorial en las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule.

La Dirección Macrozonal sur, con asiento en la comuna de Valdivia, tendrá competencia territorial en las regiones del Ñuble, Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y de Magallanes y de la Antártica Chilena.

En cada Dirección Macrozonal existirá un Director Macrozonal, quien representará al Servicio, será nombrado por el Director Ejecutivo, estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, de conformidad a la ley N° 19.882, y corresponderá a un cargo del segundo nivel jerárquico. El Director Macrozonal, previa coordinación con la Dirección Ejecutiva, podrá establecer criterios y lineamientos de evaluación de impacto ambiental en sus respectivas macrozonas."

Oficial del proyecto sometido a Declaración de Impacto Ambiental de que se trate:

Si durante el procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, ésta hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente los impactos ambientales del proyecto, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por diez días, período en el cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental. El Reglamento deberá precisar qué tipo de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, según el tipo de proyecto o actividad, serán consideradas como modificaciones sustantivas a los proyectos.

~~Tratándose de los proyectos sometidos a evaluación de conformidad a lo establecido en el artículo 18 ter, el plazo para la realización del proceso de participación ciudadana será de diez días.~~

El Servicio de Evaluación Ambiental considerará las observaciones como parte del proceso de calificación y deberá hacerse cargo de éstas, pronunciándose fundadamente respecto de todas ellas en su resolución. Dicho pronunciamiento deberá estar disponible en la página web del servicio con a lo menos cinco días de anticipación a la calificación del proyecto.

~~Cualquier persona, natural o jurídica, cuyas observaciones no hubieren sido debidamente consideradas en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental establecida en el artículo 24, podrá presentar recurso de reclamación de conformidad a lo señalado en el artículo 20, el que no suspenderá los efectos de la resolución.~~

~~Para los efectos de este artículo, se entenderá que provocan cargas ambientales aquellos proyectos que generan beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades próximas durante su construcción u operación.~~

La participación ciudadana comprende los derechos a acceder y conocer el expediente físico o electrónico de la evaluación, formular observaciones y obtener respuesta fundada de ellas.

- 42 Artículo 83, encabezamiento:

Artículo 83.- Corresponderán al Director Ejecutivo [del Servicio de Evaluación Ambiental] las siguientes funciones:

[i)....]

- 43 Artículo 84, que se deroga por sustitución:

Artículo 84.- El Servicio de Evaluación Ambiental se desconcentrará territorialmente a través de las Direcciones Regionales de Evaluación Ambiental. En cada región del país habrá un Director Regional, quien representará al Servicio y será nombrado por el Director Ejecutivo, mediante el Sistema de Alta Dirección Pública.

34. Incorpórase el siguiente artículo 84 bis.

“Artículo 84 bis.- Cada Dirección Macrozonal tendrá una oficina en cada una de las regiones que corresponda a su competencia, la cual estará encargada de velar por la debida participación ciudadana, ya sea anticipada o dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Del mismo modo, estará encargada de la evaluación y la debida coordinación de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental que participan en la evaluación de impacto ambiental de un proyecto o actividad dentro de la respectiva región.

Un funcionario del Servicio de Evaluación Ambiental estará a cargo de la Oficina Regional quien será designado por el Director Ejecutivo del Servicio.”.

35. Reemplázase el artículo 86⁴⁴ por el siguiente:

“Artículo 86.- Los proyectos serán calificados por una Comisión de Evaluación Macrozonal, presidida por el Director Macrozonal correspondiente e integrada por el Gobernador Regional, el Secretario Regional Ministerial del Ministerio del Medio Ambiente y el Secretario Regional Ministerial del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la región en que se ejecutará el proyecto, dos profesionales seleccionados a través del Sistema de Alta Dirección Pública, de conformidad a la ley N° 19.882, y un miembro designado por el Presidente de la República. Cada uno de los miembros de la Comisión de Evaluación Macrozonal deberá motivar adecuadamente su voto, basado en consideraciones técnicas y ambientales relacionadas con las causales establecidas en los artículos 16 y 19 de la Ley.

En caso que las obras de un determinado proyecto o actividad se encuentren en dos o más regiones distintas, será el Director Macrozonal quien deberá señalar cual será la autoridad regional que le corresponderá integrar la Comisión de Evaluación Macrozonal. Tal decisión, deberá realizarse a través de una resolución fundada en criterios técnicos relativos al proyecto o actividad que corresponderá calificar.

Un reglamento establecerá el funcionamiento de la Comisión.”.

36. Incorpórase el siguiente artículo 86 bis, nuevo:

“Artículo 86 bis.- Los dos profesionales señalados en el artículo anterior, serán nombrados por el Director Ejecutivo del Servicio conforme al mecanismo de selección establecido para cargos del segundo nivel jerárquico del Sistema de Alta Dirección Pública, de conformidad a la ley N° 19.882. Uno de ellos deberá tener título de abogado y haber ejercido la profesión, a lo menos, diez años y haberse destacado en la actividad profesional o académica especializada en materias de Derecho Administrativo o Ambiental; el segundo de ellos, será un licenciado en Ciencias

44 Artículo 86, que se deroga por sustitución:

Artículo 86.- Los proyectos serán calificados por una Comisión presidida por el Intendente e integrada por los Secretarios Regionales Ministeriales del Medio Ambiente, de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, y de Planificación, y el Director Regional del Servicio, quien actuará como secretario.

Las Direcciones Regionales de Evaluación Ambiental conformarán un comité técnico integrado por el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente, quien lo presidirá, y el Director Regional de Evaluación Ambiental, los directores regionales de los servicios públicos que tengan competencia en materia del medio ambiente, incluido el Gobernador Marítimo correspondiente, y el Consejo de Monumentos Nacionales. Este comité elaborará un acta de evaluación de cada proyecto la que será de libre acceso a los interesados.

con especialización en materias medioambientales y deberá contar con, a lo menos, diez años de ejercicio profesional en materias relativas al medio ambiente.

Los nombramientos tendrán una duración de seis años. El Director Ejecutivo podrá renovarlos fundadamente hasta dos veces por igual plazo.

Serán causales de cesación de los profesionales señalados en el inciso anterior las siguientes:

- a.- Expiración del plazo por el que fue nombrado;
- b.- Aceptación de renuncia;
- c.- Falta grave al cumplimiento de sus obligaciones. Serán faltas graves la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a seis sesiones durante un semestre calendario y no guardar la debida reserva de los asuntos de la Comisión de Evaluación Macrozonal, entre otras, así calificadas fundadamente por el Director Ejecutivo del Servicio; y,
- d.- Incapacidad sobreviniente. Se entiende por tal, la que impide al profesional ejercer el cargo por un período de tres meses consecutivos o más de seis meses en un año.

Por su parte, el integrante designado directamente por el Presidente de la República, será directivo de exclusiva confianza, de acuerdo al artículo 745 del decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

El cargo de los miembros de la Comisión de Evaluación Macrozonal, señalados en los incisos primero y cuarto, es de dedicación exclusiva e incompatible con todo otro empleo, cargo, función o comisión remunerada o no, que se ejerza en entidades privadas o públicas, sean estas últimas fiscales, municipales, fiscales autónomas o semifiscales, en empresas del Estado o en las que éste tenga participación por aportes de capital. Se exceptúan de estas incompatibilidades los empleos docentes hasta un límite máximo de doce horas semanales, no considerándose labores docentes las que corresponden a la dirección superior de una entidad académica. En todo caso, los miembros de la Comisión de Evaluación Macrozonal señalados, deberán prolongar su jornada para compensar el tiempo que hayan restado a su trabajo con ocasión del desempeño de actividades compatibles.

Asimismo, estarán inhabilitados para calificar un proyecto si:

- a.- En el proyecto que deban calificar, tengan interés su cónyuge o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas que estén ligadas al mismo por vínculos de adopción, o las empresas o sociedades en las cuales estas mismas personas sean sus representantes legales, mandatarios, directores, gerentes o desempeñen otros cargos directivos, posean directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas un porcentaje del capital de la sociedad superior al cinco por ciento, o que les permita elegir

45 Artículo 7°.- Serán cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento:

- a) Los cargos de la planta de la Presidencia de la República;
- b) En los Ministerios, los Secretarios Regionales Ministeriales y los Jefes de División o Jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes o superiores a dichas jefaturas, existentes en la estructura ministerial, cualquiera sea su denominación;
- c) En los servicios públicos, los jefes superiores de los servicios, los subdirectores, los directores regionales o jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes o superiores a dichas jefaturas, existentes en la estructura del servicio, cualquiera sea su denominación.

Se exceptúan los rectores de las Instituciones de Educación Superior de carácter estatal, los que se registrarán

por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la Ley sobre Universidades del Estado y los estatutos orgánicos propios de cada Institución.

o hacer elegir uno o más de sus administradores, o ejerzan una influencia decisiva en la administración o gestión de la sociedad, según lo dispuesto por el artículo 99⁴⁶ de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores; y,

- b.- Han asesorado o prestado servicios profesionales a personas naturales o jurídicas que sean titulares del proyecto que deban calificar, hasta en los dos años anteriores a la fecha de ingreso de aquél al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.”

Los miembros de la Comisión de Evaluación Macrozonal señalados en los incisos primero y cuarto percibirán una remuneración bruta mensualizada equivalente a la del Director Macrozonal correspondiente, incluida la asignación de alta dirección pública, sin que les sea aplicable lo dispuesto en el inciso octavo⁴⁷ del artículo sexagésimo quinto de la ley N° 19.882.

37. Incorpórase el siguiente artículo 86 ter, nuevo:

“Artículo 86 ter.- Cada región contará con un Comité Técnico, con asiento en la Oficina Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, el cual estará encargado de analizar técnicamente las observaciones contenidas en los pronunciamientos sectoriales sobre la Declaración o Estudio de Impacto Ambiental y sus respectivas adendas, y resolver los desacuerdos técnicos que se susciten durante la evaluación de impacto ambiental.

El Comité Técnico estará integrado por el jefe de la Oficina Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, quien lo presidirá, los directores regionales de los servicios públicos que tengan competencia en la materia del medio ambiente que se discuta, incluido el Gobernador Marítimo respectivo y el Consejo de Monumentos Nacionales. Asimismo, lo deberán integrar los Secretarios Regionales Ministeriales correspondientes conforme a la tipología del proyecto, todos de la o las regiones en que se ejecutará el proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, el Comité podrá invitar a quien estime conveniente para efectos de cumplir su labor.

46 Artículo 99.- Se entenderá que influye decisivamente en la administración o en la gestión de una sociedad toda persona, o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta, que, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, controla al menos un 25% del capital con derecho a voto de la sociedad, o del capital de ella si no se tratare de una sociedad por acciones, con las siguientes excepciones:

- a) Que exista otra persona, u otro grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta, que controle, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, un porcentaje igual o mayor;
- b) Que no controle directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas más del 40% del capital con derecho a voto de la sociedad, o del capital de ella si no se tratare de una sociedad por acciones, y que simultáneamente el porcentaje controlado sea inferior a la suma de las participaciones de los demás socios o accionistas con más de un 5% de dicho capital. Para determinar el porcentaje en que participen dichos socios o accionistas, se deberá sumar el que posean por sí solos con el de aquéllos con quienes tengan acuerdo de actuación conjunta;
- c) Cuando así lo determine la Superintendencia en consideración de la distribución y dispersión de la propiedad de la sociedad.

47 Inciso octavo:

El grado de cumplimiento del convenio de desempeño de los altos directivos públicos producirá el siguiente efecto:

- a) El cumplimiento del 95 por ciento o más del convenio de desempeño dará derecho a percibir el 100 por ciento de la remuneración bruta que le corresponda según el sistema a que estén afectos.
- b) El cumplimiento de más del 65 por ciento y menos del 95 por ciento dará derecho a percibir el 93 por ciento de dichas remuneraciones, más lo que resulte de multiplicar el 7 por ciento de la remuneración señalada en la letra a) por el porcentaje de cumplimiento del convenio de desempeño.
- c) El cumplimiento del 65 por ciento o menos dará derecho a percibir el 93 por ciento de dichas remuneraciones.

El Comité Técnico podrá sesionar las veces que el Jefe de la Oficina Regional del Servicio estime necesario. También, podrá sesionar, sólo por una vez, a petición del proponente, para efectos de resolver las dudas que se presenten durante la elaboración de cada una de las adendas.

El presidente del Comité Técnico dirimirá los desacuerdos técnicos a que se refiere el inciso primero. Además, elaborará un acta de cada sesión del Comité, la cual se incorporará al respectivo expediente de la evaluación.”.

Artículo segundo.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 3^o⁴⁸, del artículo segundo, de la ley N° 20.417, que Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente:

a) Incorpórase en el literal d), el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Evaluar, mantener o modificar aspectos referidos al seguimiento de las resoluciones de calificación ambiental, en base a la información a que se refiere el inciso anterior”.

b) Incorpórase el siguiente literal v) nuevo, pasando el actual literal v) a ser literal w):

“v) Pronunciarse respecto de las solicitudes de cambio de titularidad de las Resoluciones de Calificación Ambiental. La forma de pronunciarse y demás requisitos serán establecidos en el reglamento creado al efecto.”.

Artículo tercero.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.600, que Crea los Tribunales Ambientales.

1. Modifícase el artículo 17 de la siguiente forma:

a) Incorpórase, al numeral 4), el siguiente inciso segundo, nuevo:

48 Artículo 3°, encabezamiento:

Artículo 3°.- La Superintendencia [del Medio Ambiente] tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

[d)....]

[v)....].

“Autorizar los Términos de Referencia Ambientales protocolizados en la medida que se hayan seguido las etapas y requisitos establecidos en la normativa aplicable. Será competente el Tribunal Ambiental del territorio en que se haya realizado la participación ciudadana anticipada de la macrozona que le corresponda evaluar el proyecto.

En el ejercicio de esta facultad, el tribunal no podrá pronunciarse respecto de los acuerdos alcanzados entre las partes, en caso que los hubiere.”.

b) Reemplázase el numeral 5), por el siguiente:

“5) Conocer de la reclamación que se interponga por el Titular del proyecto en contra de la resolución de calificación ambiental que califique desfavorablemente su proyecto o imponga condiciones y de la resolución a que se refiere al artículo 25 quinquies, en el plazo de 30 días. Será competente para conocer de esta reclamación el Tribunal Ambiental del lugar en que haya sido evaluado el proyecto por la correspondiente Dirección Macrozonal. Si el proyecto hubiere sido calificado por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, será competente el Tribunal Ambiental correspondiente a la Macrozona centro.”.

c) Reemplázase el numeral 6), por el siguiente:

“6) Conocer de las reclamaciones que interponga cualquier persona natural o jurídica que haya realizado observaciones ciudadanas dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en contra de la resolución de calificación ambiental cuando en aquella no hubiere considerado adecuadamente sus observaciones, en el plazo de 30 días. Será competente para conocer de esta reclamación el Tribunal Ambiental del lugar en que haya sido evaluado el proyecto por la correspondiente Dirección Macrozonal. Si el proyecto hubiere sido calificado por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, será competente el Tribunal Ambiental correspondiente a la macrozona centro.”.

d) Reemplázase el numeral 8), por el siguiente:

“8) Conocer de las reclamaciones en contra de la resolución que califique favorablemente un determinado proyecto o actividad, de acuerdo a las causales contempladas en los artículos 16 y 19 de la ley N° 19.300. Podrá interponer la reclamación cualquier persona natural o jurídica directamente afectada en un interés legítimo ambiental de carácter específico, ya sea individual o colectivo, en el plazo de 30 días. Será competente para conocer de esta reclamación el Tribunal Ambiental del lugar en que haya sido evaluado el proyecto por la correspondiente Dirección Macrozonal. Si el proyecto hubiere sido calificado por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, será competente el Tribunal Ambiental correspondiente a la macrozona centro.

La Administración no podrá, ya sea de oficio o petición de interesado, ejercer la potestad invalidatoria del artículo 53 de la ley N° 19.880 respecto de las resoluciones de calificación ambiental, de las resoluciones que resuelvan el procedimiento del artículo 25 quinquies, así como cualquier otra resolución dictada dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.”.

- e) Intercálase el siguiente numeral 9), nuevo, pasando el actual numeral 9) a ser el numeral 10):

“9) Conocer de las reclamaciones interpuestas en contra de un acto administrativo de carácter ambiental no indicado en los numerales anteriores. El plazo para la interposición de la acción será de 30 días contado desde la notificación de la respectiva resolución.

Para estos efectos se entenderá por acto administrativo de carácter ambiental toda decisión formal que emita cualquiera de los organismos de la Administración del Estado mencionados en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que tenga competencia ambiental y que corresponda a un instrumento de gestión ambiental o se encuentre directamente asociado con uno de éstos, y en que en las respectivas leyes que regulen dichos instrumentos se establezca un reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental.

Será competente para conocer de esta reclamación el Tribunal Ambiental que ejerza jurisdicción en el territorio en que tenga su domicilio el órgano de la Administración del Estado que haya dictado el acto impugnado.”⁴⁹.

2. Modifícase, el artículo 18 de la siguiente manera:

- a) Elimínase el numeral 5).

- b) Reemplázase el numeral 7), por el siguiente:

“7) En el caso del número 8), las personas naturales o jurídicas directamente afectadas en un interés legítimo ambiental de carácter específico, ya sea individual o colectivo.”.

- c) Incorpórase el siguiente numeral 8):

“8) En el caso del número 9), el directamente afectado por el acto administrativo de carácter ambiental”⁵⁰.

49 El artículo 17, con sus modificaciones, se agrega al final, como **ANEXO II**.

50 El artículo 18 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 18.- De las partes. Los organismos de la Administración del Estado y las personas naturales o jurídicas que se señalan, podrán intervenir como partes en los asuntos de competencia de los Tribunales Ambientales, que en cada caso se indican, conforme con la enumeración del artículo 17:

- 1) En el caso del número 1) cualquier persona que considere que los decretos que tal numeral menciona no se ajustan a la ley N° 19.300 y le causan perjuicio.
- 2) En el caso del número 2), las personas naturales o jurídicas que hayan sufrido el daño o perjuicio; las municipalidades, por los hechos acaecidos en sus respectivas comunas, y el Estado, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado. Deducida demanda por alguno de los titulares señalados no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros coadyuvantes. En el caso del inciso quinto del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, la acción deberá siempre ejercerla el Consejo de Defensa del Estado como parte principal.
- 3) En el caso del número 3), las personas naturales o jurídicas directamente afectadas por la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente.
- 4) En el caso del número 4), la Superintendencia del Medio Ambiente.
- 5) ~~En los casos de los números 5) y 6), las personas naturales y jurídicas que presentaron sus reclamaciones de conformidad a la ley.~~
- 6) En el caso del número 7), cualquier persona que considere que los actos administrativos que dicten los Ministerios o servicios públicos para la ejecución o
- 7) En el caso del número 8), las personas naturales o jurídicas directamente afectadas en un interés legítimo ambiental de carácter específico, ya sea individual o colectivo.
- 8) En el caso del número 9), el directamente afectado por el acto administrativo de carácter ambiental.

En los procedimientos que se regulan en esta ley será aplicable lo dispuesto en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. Se presumirá que las municipalidades y el

Artículo cuarto.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 4, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija la planta de personal del Ministerio del Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental, en el sentido que se indica:

1. Reemplázase en su artículo 11⁵¹ en la planta de Directivos, segundo nivel jerárquico Título VI Ley N° 19.882, los 15 cargos de directores regionales grado 6° EUS por 3 cargos de directores macrozonales, grado 6° EUS.
2. Reemplázase en su artículo 12⁵² la denominación “Directores Regionales” por “Directores Macrozonales”.

Estado tienen el interés actual en los resultados del juicio que dicha norma exige.

51 Artículo 11, encabezamiento:

Artículo 11.- Fijase la siguiente planta de personal del Servicio de Evaluación Ambiental:

52 Artículo 12, encabezamiento:

Artículo 12.- Establécense los siguientes requisitos para el ingreso y promoción a las plantas y cargos antes señalados:

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- Mientras no asuman los gobernadores regionales electos, las normas legales de la presente ley que hagan referencia a dichas autoridades se entenderán referidas al intendente, en su calidad de órgano ejecutivo de los gobiernos regionales.

Artículo segundo.- Las materias reguladas por la presente ley, entrarán en vigencia una vez que se hayan realizado las modificaciones al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Artículo tercero.- Los proyectos o actividades que se encuentren sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental al momento de entrada en vigencia de la presente ley, continuarán su tramitación bajo la normativa vigente al momento del ingreso a evaluación de impacto ambiental.

Artículo cuarto.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a las reasignaciones efectuadas desde la partida presupuestaria del Ministerio de Medio Ambiente, y en lo que faltase con cargo a la Partida presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que se establezcan en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.

ANEXO I

Artículo 10 de la ley 19.300, con las modificaciones propuestas:

Artículo 10.- Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes:

- a) Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la autorización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas, presas, drenaje, desecación, dragado, defensa o alteración, significativos, de cuerpos o cursos naturales de aguas;
- b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones;
- c) Centrales o plantas generadoras de energía eléctrica, según sus magnitudes, las cuales se determinarán sobre la base de los impactos que produzca el tipo de tecnología que utilicen, comprendiendo prospecciones con fines geotérmicos;
- d) Reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas;
- e) Aeropuertos, terminales de buses, camiones y ferrocarriles, vías férreas y autopistas;
- f) Puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos;
- g) Proyectos de desarrollo urbano o turístico, en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados según lo dispuesto en el Párrafo 1 Bis;
- h) Proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas, que no cuenten con un plan de descontaminación o prevención vigente, según corresponda;
- i) Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda;
- j) Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos;
- k) Instalaciones fabriles, tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productoras de materiales para la construcción, de equipos y productos metálicos y curtiembres, de dimensiones industriales;
- l) Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales, de dimensiones industriales;
- m) Proyectos de desarrollo o explotación forestal en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo, industrias de celulosa, pasta de papel y papel, plantas astilladoras, elaboradoras de madera y aserraderos, todos de dimensiones industriales;
- n) Proyectos de explotación intensiva, cultivo, y plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos;
- ñ) Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosiva o reactivas;
- o) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos asociados a las obras antes dichas o plantas industriales, sistemas de tratamiento o valorización de residuos industriales líquidos o sólidos y las operaciones de manejo de residuos peligrosos;

- p) Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita;
- q) Aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados o a cursos o masas de agua que puedan ser afectadas, y
- r) Proyectos de desarrollo, cultivo o explotación, en las áreas mineras, agrícolas, forestales e hidrobiológicas que utilicen organismos genéticamente modificados con fines de producción y en áreas no confinadas. El reglamento podrá definir una lista de especies de organismos genéticamente modificados que, como consecuencia de su comprobado bajo riesgo ambiental, estarán excluidos de esta exigencia. El mismo reglamento establecerá el procedimiento para declarar áreas como libres de organismos genéticamente modificados, y
- s) Plantas desaladoras o desalinizadoras.

ANEXO II

Artículo 17 de la ley 20.600, con las modificaciones propuestas:

Artículo 17.- Competencia. Los Tribunales Ambientales serán competentes para:

- 1) Conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de los decretos supremos que establezcan las normas primarias o secundarias de calidad ambiental y las normas de emisión; los que declaren zonas del territorio como latentes o saturadas y los que establezcan planes de prevención o de descontaminación, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley N° 19.300. En el caso de las normas primarias de calidad ambiental y normas de emisión, conocerá el tribunal que en primer lugar se avoque a su consideración, excluyendo la competencia de los demás. Respecto de las normas secundarias de calidad ambiental, los decretos supremos que declaren zonas del territorio como latentes o saturadas, y los que establezcan planes de prevención o de descontaminación, será competente el Tribunal Ambiental que tenga jurisdicción sobre la zona del territorio nacional en que sea aplicable el respectivo decreto.
- 2) Conocer de las demandas para obtener la reparación del medio ambiente dañado, en conformidad con lo dispuesto en el Título III de la ley N° 19.300. Será competente para conocer de estos asuntos el Tribunal Ambiental del lugar en que se haya originado el hecho que causa el daño, o el de cualquier lugar en que el daño se haya producido, a elección del afectado.
- 3) Conocer de las reclamaciones en contra de las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Será competente para conocer de estas reclamaciones el Tribunal Ambiental del lugar en que se haya originado la infracción.
- 4) Autorizar las medidas provisionales señaladas en las letras c), d) y e) del artículo 48 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, así como las suspensiones señaladas en las letras g) y h) del artículo 3° de esa ley, y las resoluciones de la Superintendencia que apliquen las sanciones establecidas en las letras c) y d) del artículo 38 de la misma ley, elevadas en consulta. Será competente para autorizar estas medidas el Tribunal Ambiental del lugar en que las mismas vayan a ser ejecutadas.

Autorizar los Términos de Referencia Ambientales protocolizados en la medida que se hayan seguido las etapas y requisitos establecidos en la normativa aplicable. Será competente el Tribunal Ambiental del territorio en que se haya realizado la participación ciudadana anticipada de la macrozona que le corresponda evaluar el proyecto.

En el ejercicio de esta facultad, el tribunal no podrá pronunciarse respecto de los acuerdos alcanzados entre las partes, en caso que los hubiere

- 5) Conocer de la reclamación que se interponga por el Titular del proyecto en contra de la resolución de calificación ambiental que califique desfavorablemente su proyecto o imponga condiciones y de la resolución a que se refiere al artículo 25 quinquies, en el plazo de 30 días. Será competente para conocer de esta reclamación el Tribunal Ambiental del lugar en que haya sido evaluado el proyecto por la correspondiente Dirección Macrozonal. Si el proyecto hubiere sido calificado por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, será competente el Tribunal Ambiental correspondiente a la Macrozona centro.
- 6) Conocer de las reclamaciones que interponga cualquier persona natural o jurídica que haya realizado observaciones ciudadanas dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en contra de la resolución de calificación ambiental cuando en aquella no hubiere considerado adecuadamente sus observaciones, en el plazo de 30 días. Será competente para conocer de esta reclamación el Tribunal Ambiental del lugar en que haya sido evaluado el proyecto por la correspondiente Dirección Macrozonal. Si el proyecto hubiere sido calificado por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, será competente el Tribunal Ambiental correspondiente a la macrozona centro.

7) Conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de los actos administrativos que dicten los Ministerios o servicios públicos para la ejecución o implementación de las normas de calidad, de emisión y los planes de prevención o descontaminación, cuando estos infrinjan la ley, las normas o los objetivos de los instrumentos señalados. El plazo para reclamar será el establecido en el artículo 50 de la ley N° 19.300. Tratándose de las normas primarias de calidad ambiental y normas de emisión, conocerá el tribunal que en primer lugar se avoque a su consideración, excluyendo la competencia de los demás. Respecto de la aplicación de las normas secundarias de calidad ambiental, de los decretos supremos que declaren zonas del territorio como latentes o saturadas, y de los que establezcan planes de prevención o de descontaminación, será competente el Tribunal Ambiental que tenga jurisdicción sobre la zona del territorio nacional en que sea aplicable el respectivo decreto.

8) Conocer de las reclamaciones en contra de la resolución que califique favorablemente un determinado proyecto o actividad, de acuerdo a las causales contempladas en los artículos 16 y 19 de la ley N° 19.300. Podrá interponer la reclamación cualquier persona natural o jurídica directamente afectada en un interés legítimo ambiental de carácter específico, ya sea individual o colectivo, en el plazo de 30 días. Será competente para conocer de esta reclamación el Tribunal Ambiental del lugar en que haya sido evaluado el proyecto por la correspondiente Dirección Macrozonar. Si el proyecto hubiere sido calificado por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, será competente el Tribunal Ambiental correspondiente a la macrozona centro.

La Administración no podrá, ya sea de oficio o petición de interesado, ejercer la potestad invalidatoria del artículo 53 de la ley N° 19.880 respecto de las resoluciones de calificación ambiental, de las resoluciones que resuelvan el procedimiento del artículo 25 quinquies, así como cualquier otra resolución dictada dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En los casos de los numerales 5) y 6) del presente artículo no se podrá ejercer la potestad invalidatoria del artículo 53 de la ley N° 19.880 una vez resueltos los recursos administrativos y jurisdiccionales o transcurridos los plazos legales para interponerlos sin que se hayan deducido.

9) Conocer de las reclamaciones interpuestas en contra de un acto administrativo de carácter ambiental no indicado en los numerales anteriores. El plazo para la interposición de la acción será de 30 días contado desde la notificación de la respectiva resolución.

Para estos efectos se entenderá por acto administrativo de carácter ambiental toda decisión formal que emita cualquiera de los organismos de la Administración del Estado mencionados en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que tenga competencia ambiental y que corresponda a un instrumento de gestión ambiental o se encuentre directamente asociado con uno de éstos, y en que en las respectivas leyes que regulen dichos instrumentos se establezca un reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental.

Será competente para conocer de esta reclamación el Tribunal Ambiental que ejerza jurisdicción en el territorio en que tenga su domicilio el órgano de la Administración del Estado que haya dictado el acto impugnado

10) [9)] Conocer de los demás asuntos que señalen las leyes.

